



Tras 52 años de conflicto con las guerrillas, la lucha por la tierra sigue siendo la gran lacra

La violencia, el cáncer enquistado en Colombia



MIGUEL ÁNGEL MALAVIA

Tras el Acuerdo de Paz con las FARC re-frendado hace un año en el Parlamento y el tiempo de tregua del ELN vigente hasta el 1 de enero mientras negocia con el Gobierno, esta es la primera vez en 52 años que no padecemos la guerrilla en Colombia. Algo clave, pues estamos ante un conflicto que ha generado casi un millón de víctimas y más de siete millones de desplazados... Pero, si hablamos de una cultura de paz, con esto apenas llegamos al 3%. Así de contundente se muestra el jesuita colombiano **Luis Guillermo Guerrero**, director general del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en un encuentro con periodistas celebrado recientemente en la sede madrileña de Entreculturas y al que asistió *Vida Nueva*.

Su denuncia es clara: "Aunque han bajado los índices de violencia, en el último año aún se han registrado en el país casi 10.500 homicidios y

ha habido cerca de 200 líderes de comunidades locales asesinados con un fin político, teniendo aún más fuerza los paramilitares... Y, lo peor de todo, es que parece que nos hemos acostumbrado a ello. ¿Cómo nos puede ocurrir esto?"

Un claro ejemplo de este drama enquistado en la historia de Colombia es lo ocurrido semanas atrás en Tumaco, cuando "una decena de policías asesinaron a varios campesinos desarmados en una zona de cultivo de coca. La región, antes dominada por las FARC, está hoy tomada por el narcotráfico, que tiene allí un Estado paralelo. Se hace muy extraño lo ocurrido, no pudiendo evitar pensar en qué hacían allí un puñado de agentes solos". De hecho, confirma Guerrero, a los pocos días, esos mismos policías atacaron a un grupo de investigadores de la OEA desplazado hasta la zona. Una muestra clara, a su juicio, de que hubo "intereses ocultos" en esa supuesta

Arriba, distintas imágenes de manifestaciones por la paz y de víctimas del conflicto. Abajo, un guerrillero del ELN

operación policial. Algo que, desgraciadamente, no le sorprende: “Uno de los fenómenos ligados con más fuerza al conflicto en todas estas décadas es la de la tierra... Ni más ni menos, estamos ante ocho millones de hectáreas usurpadas a comunidades campesinas e indígenas en siglo y medio, pues la crisis en Colombia va mucho más allá de estos últimos 52 años. En el fondo, lo que trasciende es la gran diferencia entre la ciudad y el campo, eco también de la gran corrupción política y, más allá, a nivel de sociedad”.

Así, este jesuita reconoce que hoy hay una Colombia que está dejando atrás el conflicto entre las guerrillas, el Estado y los paramilitares, que son un tercer y muy importante grupo, pues se trata de fuerzas armadas al margen de la ley y de las que se han valido muchos latifundistas para adueñarse de tierras de campesinos e indígenas con la excusa de la guerra a las FARC o al ELN. A la vez, este paradigma está dando lugar a otro no menos desesperanzador: “Hay tres tsunamis que afectan a mi país: la injusta distribución de la tierra, el narcotráfico y la minería que se desarrolla desde hace algo menos de 20 años, poco respetuosa con el medio ambiente y con las comunidades locales”.

De hecho, lamenta el responsable del CINEP, estos tres males están relacionados entre sí: “Gran parte de la minería, por ejemplo, es ilegal y está ligada al narcotráfico, excluyendo a la tradicional y provocando todo tipo de conflictos, ambientales y humanos. El Gobierno carece de la eficacia y la fuerza necesarias para, además de implementar el Acuerdo de Paz, combatir estas lacras, siendo sus leyes en exceso lentas y sin un plan económico concreto para su implementación”.

Todo ello conduce a situaciones de inestabilidad y a que haya regiones en las que la Administración apenas se haga presente, pagando esta situación en primer lugar muchos de los líderes locales, que son asesinados o reprimidos. Para Guerrero, esto lleva a que hechos como los ocurridos en Tumaco (“donde ni siquiera

podemos tener una certeza de quién lideró la operación policial”, no descartándose que fuera obra del propio narcotráfico local para hacerse con las tierras de los campesinos que antes les abastecían) puedan darse en muchas otras zonas rurales. Y es que “uno de los grandes déficits del Acuerdo de Paz es resolver la cuestión de la tierra, visibilizando al fin a las muchas asociaciones de todo signo que se han constituido para este fin”. Pero “ni siquiera se ha podido aplicar la anterior Ley de Víctimas y de Redistribución de la Tierra, a la que incluso se han acogido terratenientes que usurparon tierras para reclamar que ahora les quiere ser arrebatada su posesión...”.

Cultivos alternativos a la coca

Una situación, esta, que evidencia que “falta decisión política para atacar un fenómeno clave en este conflicto”. A su juicio, sería fundamental que se aplicara de un modo auténtico uno de los puntos del Acuerdo de Paz: que el apoyo a los antiguos cultivadores de coca para que se dediquen a otros productos en sus tierras les sea rentable y se les garantice protección, pues, en caso contrario, estarán expuestos a los narcos como antes lo estaban a la guerrilla. Precisamente, es lo que pasó en Tumaco, una zona donde antes dominaban las FARC y donde ahora los nuevos dueños son los narcos, que ganan su posición mediante la violencia o los sobornos.

Con el fin de propiciar un “cambio real” que fortalezca el mundo del campo, el CINEP, obra social de la Compañía de Jesús con casi medio siglo de vida, impulsa desde hace 20 años la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, buscando dotar de “herramientas pedagógicas, políticas y sociales” a los líderes de las comunidades de base en entornos rurales. Desde el principio ha enfocado su acción en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, situándose de cara a este curso también en Barraca Bermeja, en una zona empobrecida del interior.

Con ello, el objetivo es “politizar a los ciudadanos”, en el sentido de que los asistentes se comprometan en “la reflexión sobre el camino que nos trajo hasta aquí y para que prevalezca la conciencia de que la convivencia es muy importante y hay que promoverla desde una participación activa”. ●



Luis Guillermo Guerrero

VEGA CASTRILLO / ENTRECULTURAS

Instrumento clave para el Acuerdo de Paz

El CINEP es una de las instituciones que más se ha volcado durante años para conseguir la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. De hecho, la entidad jesuita asume la secretaría técnica para los verificadores internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica. Por ahora, defiende Luis Guillermo Guerrero, lo mejor es que “se ha conseguido que casi 7.000 guerrilleros se hayan desmovilizado y acepten vivir en campamentos donde se capacitan para la vuelta a la vida civil”, siendo el reto pendiente “convencer al millar que aún no acepta el armisticio” y no forma parte del nuevo partido constituido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que mantiene las siglas FARC. En este sentido, lamenta “la presión de una derecha radical que dice que hemos entregado el país”, siendo lo más triste que “no reconocen ser parte del conflicto”, pues Colombia lleva décadas “en manos de unas élites que se suceden entre sí en el poder, repartiéndose todo entre varias familias”. Admite que “nunca pensé que apoyaría al presidente Santos, ministro de Defensa en tiempos de Uribe, precisamente, en uno de los períodos más sangrientos”, donde se alcanzaron los 30.000 homicidios. Pero ahora impera “el bien mayor” y siente que con él se está ante una “oportunidad de cambio”. Aunque aún queda muchísimo trabajo por delante. Casi todo.